



UNIVERSIDAD
Finis Terrae
VINCE IN BONO MALUM

Observatorio Internacional

Nº21 | Octubre 2017

Facultad de Comunicaciones y Humanidades | Universidad Finis Terrae



- El incierto proceso independentista de Cataluña
- Los retos del chavismo y de la oposición venezolana
- Arabia Saudita y la “revolución de las licencias de conducir”
- Myanmar: la Nobel de la Paz y la persecución a los rohingya
- Nikki Haley: la poderosa embajadora de EE.UU. en la ONU

FUTUROS INCIERTOS

El mes pasado, una de las grandes interrogantes de la actualidad noticiosa mundial era saber qué ocurriría con el llamado a realizar un referéndum independentista en Cataluña. Hoy, después de todo lo ocurrido el 1 de octubre, la pregunta es qué futuro tiene este proceso. Sobre todo tras el reciente intercambio de cartas entre Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy.

Ambos actores parecen estar en posiciones irreconciliables. Si la Generalitat declara oficialmente la independencia, Rajoy activará el temido artículo 155 de la Constitución española. Pero, al mismo tiempo, si Madrid interviene en Cataluña amparado en el 155, Puigdemont afirma que declarará la independencia de manera irreversible. Una crisis, aparentemente, estancada.

Otro escenario complejo es Venezuela, donde tras las recientes elecciones de gobernadores, el chavismo se impuso en 18 de las 23 provincias. La oposición rápidamente ha salido a cuestionar su validez y en el extranjero varias voces se niegan a reconocer dichos resultados. Un difícil preámbulo de lo que podría ser la elección presidencial del próximo año.

Mientras tanto, en Arabia Saudita, finalmente el gobierno autorizó a las mujeres a conducir autos. Una prohibición de larga data, cuya abolición parece ser el reflejo de una monarquía dispuesta a considerar una mayor apertura. Y que muchos esperan que solo sea el comienzo.

En Myanmar, la ex Birmania, actualmente se vive una de las mayores crisis humanitarias de los últimos años y que tiene como protagonista al grupo étnico de los rojinya. En esta edición profundizamos en quiénes son y por qué está ocurriendo esto.

Finalmente, revisamos la trayectoria de Nikki Haley, la poderosa embajadora de EE.UU. en la ONU, quien ha tenido un indiscutido protagonismo en temas como Siria o Corea del Norte. Y que se ha transformado en una de las figuras clave del gobierno de Donald Trump.

Alberto Rojas M.
Periodista, Universidad Diego Portales.
Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Director del Observatorio de Asuntos Internacionales
Facultad de Comunicaciones y Humanidades Universidad Finis Terrae.



El incierto proceso independentista de Cataluña

El deseo de emancipación de esta autonomía enfrenta su momento más difícil tras la advertencia de Mariano Rajoy de activar el temido artículo 155 de la Constitución española.

Luis Lira C.



Incierto. Así podría definirse el proceso iniciado por Cataluña para lograr su independencia de España. Incierto por el momento en que se da y por las respuestas dadas tanto por los partidarios de que esto suceda como por el Gobierno de España. Es que en los últimos días se ha puesto en juego la estabilidad del país, cuyas

consecuencias más graves van por el aspecto económico. Al mismo tiempo, más allá de las fronteras españolas, la Unión Europea ha dejado en claro que no se meterá en este tema y que la solución debe salir de casa.



El escenario se complicó aún más el jueves 19 de octubre, cuando el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunció a través de una nueva carta al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que “si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión”, el Parlament “podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10”.

Frente a sus dichos, la respuesta de Rajoy no se hizo esperar y afirmó que ante “la negativa del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a atender el requerimiento que le fue remitido el pasado 11 de octubre y en el que se reclamaba que informara de forma clara y precisa si alguna autoridad de Cataluña había procedido a declarar la independencia de esa comunidad autónoma y se le instaba a restituir el orden constitucional alterado”, continuará los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución “para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”. Y definió para el sábado 21 un Consejo de Ministros extraordinario en el que se analizará ese tema, mientras que el Senado español planteó celebrar el

pleno el próximo viernes 27, para aprobar la aplicación del artículo 155.

En ese contexto el Partido Popular y el PSOE ya anunciaron un acuerdo para que haya elecciones en Cataluña en enero del próximo año.

Ingresos catalanes

Cataluña es una de las comunidades autónomas más ricas de España. Su capital, Barcelona, es la segunda ciudad en importancia del país, siempre compitiendo a la par en materia económica y cultural con Madrid. Y Sabadell, otra de sus ciudades, fue conocida en su época de esplendor productivo como la “Manchester catalana”, lo que habla del impulso industrial de la zona. Aportando el 20% del PIB de España, desde la reinstauración de la democracia en los 70, Cataluña ha podido desarrollar su cultura y negocios a la par del resto de las comunidades. Mientras que en el Parlamento Europeo, el catalán tiene un lugar privilegiado y un equipo que vela por los intereses de la región.

Asimismo, en 2006, Cataluña volvió a tener un Estatuto de Autonomía, aprobado por

el Parlamento español y que contenía gran parte de las demandas autonomistas de los catalanes. De todas formas, el Partido Popular de Mariano Rajoy pidió declararlo inconstitucional.

Sin embargo, el afán de independencia reapareció con las crisis económicas que afectaron a Europa y al resto del mundo a partir de 2008. El desempleo y los recortes sociales avivaron las voces de quienes aseguraban que en vez de financiar a España, Cataluña debía seguir por su cuenta. En 2012, el entonces presidente de la Generalitat Artur Mas reclamó la necesidad de que Cataluña contara con su propio sistema fiscal, idea que fue rechazada por Mariano Rajoy al ser inconstitucional. Para muchos, este fue el detonante del movimiento separatista que continuó con la discusión política sobre la independencia de Cataluña ese mismo año, luego en 2014 y 2015, hasta llegar al referéndum del 1 de octubre de este año.

Dicha consulta, convocada por la Generalitat de Cataluña (que reúne al Consejo Ejecutivo, la Presidencia y el Parlamento de la Comunidad Autónoma), fue declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español y la Comisión Europea. Y la cantidad de detenidos por parte de la Guardia Civil, más

que calmar la situación, motivó que la gente acudiera en masa a los locales de votación. El conteo final de votos, sin ningún control oficial, otorgó la victoria al “Sí” con casi el 90% de las preferencias, aunque con una participación ciudadana real del 43,03%.

En este contexto, la euforia duró literalmente 21 segundos. El pueblo catalán esperaba que después del referéndum Carles Puigdemont diera el vamos a la República en el Parlamento local, pero súbitamente dio paso a la incertidumbre: “Hoy asumo el mandato del pueblo de Cataluña para que sea un Estado independiente en forma de República” (...) Proponemos que el Parlament suspenda la declaración de independencia para emprender un dialogo para llegar a una solución acordada”.

¿Qué quiso lograr Puigdemont con esta declaración? En primer lugar, demostrar una mayor cautela en el tema económico. Desde el referéndum del 1 de octubre, 540 empresas han abandonado Cataluña, en donde destacan compañías de gran facturación como Editorial Planeta, Banco Sabadell y CaixaBank, además de 1.300 pymes. Un segundo aspecto estaba ligado al tema político, ya que quitando rebeldía al discurso y llamando al dialogo, la presión caía sobre Madrid.



Todo en manos de Rajoy

En el Palacio de La Moncloa catalogaron el movimiento independentista como ilegal desde un comienzo. Tras una torpe reacción al sacar a la Policía Nacional y la Guardia Civil a la calle, lo que provocó que aumentara el rencor hacia Madrid, el gobierno de Mariano Rajoy destacó los perjuicios económicos que traería la secesión catalana.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en su momento que los acontecimientos habían provocado la caída de la inversión: “creemos que bajo una situación política y económica adversa, Cataluña con toda seguridad sufrirá el mayor impacto, posiblemente lo que conduciría a una fuerte desaceleración y tal vez una recesión”, asegurando que esta caída “la pagarán los ciudadanos”.

Acusando recibo del llamado catalán, Mariano Rajoy señaló que el diálogo con Puigdemont solo era posible “dentro de la ley”, entregando al presidente un plazo de cinco días para que explicara si sus palabras habían sido una declaración de independencia. Si la respuesta era positiva, tendría tres días para retractarse, de lo contrario el gobierno tomaría medidas. Justo al final del plazo, Puigdemont respondió con la misma ambigüedad, llamando al diálogo.

Ahora Rajoy deberá pensar en los próximos pasos, en donde destaca la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Dicha instancia, nunca antes utilizada, se refiere a “tomar las medidas necesarias para obligar” a las comunidades autónomas “al cumplimiento forzoso” de sus obligaciones. Si bien no señala cuáles son las medidas, se podrían suspender a los funcionarios actuales y en el caso de Carles Puigdemont, removerlo por un delegado español en Cataluña.

La aplicación del señalado artículo dependerá del manejo que tenga Rajoy -en los próximos días- de las propuestas de Puigdemont. Es improbable que acceda a la autonomía, pero medidas fiscales que dejen contentos a los catalanes -dentro del marco de la ley- podrían ser la solución para destrabar el conflicto. Mientras tanto, la decisión de encarcelar a dos promotores del referéndum del 1 de octubre, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, no favorece el diálogo.

De esta forma, la resolución de la crisis política ha quedado en manos del gobierno en Madrid. Y de él dependerá, en gran medida, el rumbo que tome España a partir de ahora.

Luis Lira Camposano
Periodista, Universidad Finis Terrae.
Magíster en Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Actualmente se desempeña como Secretario Académico
de la Carrera de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Es profesor de Historia Contemporánea de Occidente y del ramo Europa en el siglo XXI.
luisliraft@uft.cl



Los retos del chavismo y de la oposición venezolana

La reciente elección de gobernadores ha motivado diversas denuncias de fraude electoral, cuando el país se encamina los comicios presidenciales de 2018.

María Ignacia Matus M.



Los resultados de las recientes elecciones de gobernadores en Venezuela, no hicieron más que abrir un nuevo flanco de conflicto y sembrar un manto de dudas sobre el futuro del país. Este nuevo triunfo del chavismo plantea un sinfín de desafíos e interrogantes para todos los sectores políticos, incluso para la propia comunidad internacional.

Suspendidas desde 2016, con la llegada de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se esperaba que las elecciones fueran realizadas en diciembre de 2017. Sin embargo, de forma sorpresiva y por orden del Ejecutivo, en septiembre decidieron adelantarlas, dejando a su vez un escaso margen de tiempo de reacción.



Un proceso que ha estado marcado por los continuos cuestionamientos de la oposición, en el cual la reubicación de más de 200 locales de votación y la fusión de centros de votación -sin previa notificación a los más de 500.000 electores afectados- ha sido uno de los puntos más polémicos de la controversia.

A ello se suma la prohibición de la asistencia de observadores internacionales, siendo el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), creado por Hugo Chávez en 2004, el único organismo autorizado para auditar los comicios. Meses atrás, la inhabilitación de partidos opositores y las acusaciones en contra de importantes líderes, lograron que finalmente terminaran en supuestas irregularidades que les impidieron presentarse a la reelección, como fue el caso de Henrique Capriles.

Cuestionamientos

Sin duda, las expectativas en estas votaciones eran altas en función de los meses de protestas, desabastecimiento de productos básicos y medicamentos, así como el incremento de disidentes a las políticas de Maduro. Por otra parte, el índice de participación ciudadana alcanzó

el 61%, demostrando un incremento en comparación a elecciones anteriores.

A pesar de todo ello, y que diversas encuestas pronosticaban un triunfo para la oposición, 18 de las 23 gobernaciones quedaron en manos del chavismo. Y si bien la oposición logró ganar más gobernaciones, perdió las únicas que controlaba previamente: Miranda, Amazonas y Lara.

El jefe de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Gerardo Blyde, indicó que “en estos momentos no reconocemos ninguno de los resultados. Estamos ante un momento muy grave para el país (...) Exigimos auditar todo el proceso, su sistema, las huellas, todo el proceso”.

De este modo, el presente escenario sitúa a Venezuela en una posición aún más compleja e incierta, al intentar, como señala Darío Mizrahi, “sostener un simulacro de democracia y apaciguar la presión internacional”.

A partir de la entrega de los resultados oficiales, las posturas se han endurecido. El gobierno ha exigido que el juramento

de los nuevos gobernadores sea ante la ANC, lo que para la oposición significaría legitimar el régimen de Maduro, mientras en forma paralela, exigen una auditoría de los resultados. “No asistiremos a ningún proceso de exploración, conversación o negociación, hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías y cambios que requieren la pulcritud inherente al ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos”, anunció Ángel Oropeza, en nombre de la opositora Mesa de la Unidad Democrática.

El futuro político

La comunidad internacional ha reaccionado rápidamente denunciando irregularidades, mientras que la Unión Europea -junto con su rechazo a reconocer a la ANC- anunció que prepara sanciones selectivas contra personalidades consideradas responsables de la “represión contra la población civil”.

En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien desde su llegada al organismo ha sido un férreo opositor a Maduro, conformó una comisión para determinar si existen fundamentos para denunciar al régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. De hecho, este lunes se dio inicio a las audiencias que recabarán antecedentes que permitan sustentar dicha petición. Es así como se han escuchado los testimonios de ex alcaldes y funcionarios del gobierno, víctimas de la represión en el marco de las protestas, y de diplomáticos, jueces y magistrados a raíz de los abusos del poder judicial.

En cuanto al futuro político de Venezuela, sin duda, estos comicios son la antesala para lo que Maduro ha anunciado: “En el 2018, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela hay elecciones presidenciales”. Sin embargo, ante la inestabilidad política, económica y social por la que atraviesa

el país, y como ha quedado demostrado, las elecciones no han sido la salida para destrabar esta crisis; por el contrario, se han convertido en un aliciente para que la crisis escalara.

Frente a este panorama, y el entendimiento entre ambas partes situado en un punto muerto, cabe observar cuatro elementos que entregarán algunas luces de aquí al 2018.

En primer lugar, el rol que adquiera la comunidad internacional. Por primera vez, este año diversos organismos internacionales han sido capaces de cuestionar la situación venezolana e incentivar la búsqueda de consensos, e incluso castigar su participación en dichas instancias multilaterales. Sin embargo, las reacciones se han limitado a sanciones y/o declaraciones, sin traducirse en acciones concretas por parte del gobierno de Maduro. ¿Cuál será el límite que la comunidad internacional, específicamente los organismos regionales, no estarán dispuestos a aceptar?

Segundo, que la oposición deberá enfrentar una ardua tarea para mantener cohesionado a sus adherentes, frente a la desesperanza e incredulidad en los procesos institucionales del régimen, que sin duda, podrá generar nuevos éxodos de venezolanos y mermar así la capacidad de convocatoria que tenga la oposición. Asimismo, la consolidación de la coalición, como bloque, seguirá siendo un elemento fundamental para mantenerse como interlocutor válido ante el gobierno y la comunidad internacional.

Tercero, el llamado “Plan República”, mediante el cual el gobierno desplegó a soldados armados para el control de las elecciones, exhibió la lealtad de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) hacia Maduro, cuya unidad ha sido uno de los pilares que sostiene al régimen.



Lo anterior, a pesar de los aislados casos de sublevación. La subsistencia de esta unidad, será determinante para la continuidad del gobierno.

Por último, dependiendo de cómo las variables anteriormente señaladas se desenvuelvan, incidirán en las futuras

acciones que emprenda Maduro: radicalizar el régimen o generar condiciones para buscar una solución política consensuada. Todo lo anterior, bajo un telón cargado de incertidumbres y acusaciones que parecieran haber puesto fin a la denominada “Revolución Bolivariana”.

María Ignacia Matus M.
Periodista, Universidad de los Andes.
Magíster en Ciencia Política, Pontificia Universidad Católica.
Actualmente se desempeña en el Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) y es profesora de Actualidad Internacional en la Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
mmatusm@uft.edu



Arabia Saudita y la “revolución de las licencias de conducir”

La decisión del rey Salman, de autorizar a las mujeres del reino a manejar automóviles a partir de junio de 2018, representa un cambio enorme en la historia de este país.

Manuel Férrez G.



El 2 de octubre pasado, numerosos medios internacionales publicaron una noticia sobre la vida de Manal al Sharif, una mujer saudita que en mayo de 2011 sacudió las redes sociales al subir un video de ella misma al volante de su automóvil¹.

Manal cuenta en su libro *Daring to Drive: A Saudi Woman's Awake* cómo fue su proceso de transformación personal, de ser una mujer que validaba sin cuestionar el sistema político y moral del reino de Arabia Saudita hasta atreverse a desafiar una de las leyes más polémicas de su país y asumir las consecuencias de dicho desafío (perdió la custodia de su hijo, fue

¹ <http://www.elmundo.es/cronica/2017/10/02/59cfeddde5fdea330c8b45d5.html>



despedida de su trabajo y finalmente tuvo que exiliarse en Australia).

Es que a fines de septiembre, el rey Salman emitió un Decreto Real por el cual se informó que las mujeres del reino estarían autorizadas a obtener licencias de conducir a partir de junio de 2018². Si bien esto significa un paso importantísimo para la equidad de género en el país, habría que contextualizar históricamente la lucha de las mujeres sauditas por la igualdad legal y política en el proceso de creación del reino dominado por la familia Saud desde su fundación.

En todos los países que componen la península arábiga (Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrén y Kuwait) se puede detectar una gran discrepancia entre sociedades muy tradicionales y apegadas a viejas formas de lidiar con los asuntos sociales, y que al mismo tiempo construyen ciudades modernas y cuentan con avances tecnológicos impresionantes³.

2 https://elpais.com/internacional/2017/09/26/actualidad/1506453152_811433.html

3 Omán y Yemen resultan ser los países más pobres y atrasados tecnológicamente de la zona.

Esta contradicción tiene su fuente en que dicha península es el corazón histórico, geográfico y espiritual del islam, y al mismo tiempo un lugar de importancia estratégica para la economía del siglo XXI, aún centrada en el petróleo.

Mientras que las sociedades de dichos países sostienen ser muy tradicionales y no requerir cambios en las normas sociales de convivencia o en sus estructuras organizacionales y políticas, sus miembros (principalmente los más acaudalados) tratan de vivir en un ambiente moderno, a lo que se suma el que todos los países de la región son ávidos importadores de bienes de consumo y armamento occidentales.

Debido a la riqueza petrolera de algunos estados del Golfo, sus líderes son capaces de llevar a cabo un programa muy agresivo de “islamización” en la zona; en dicho programa hay un llamamiento a retomar el khaliji (los usos y costumbres propios del Golfo) como elemento central de la propagación internacional de sus prácticas particulares incluida, por supuesto, la subyugación de la mujer y la instauración de los códigos de vestimenta tradicionales.

El rol de la mujer en el espacio público y en la vida económica y política del reino saudita resulta, entonces, cargado de contradicciones y paradojas que en los últimos años han tomado más relevancia debido a los medios alternativos de comunicación (YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp).

Desde que en septiembre de 1932 Abd al Aziz unificara las regiones del Najd y el Hijaz bajo el nombre de “Reino de Arabia Saudita”, apoyado por la Ikhwan (la Hermandad)⁴ -grupo fundado en los principios wahabitas, corriente político-religiosa sunita de la escuela jurídica hanbalí-, la situación de las mujeres ha sido objeto de tensión interna y crítica internacional⁵.

Sería hasta marzo de 1992 cuando podemos encontrar un momento coyuntural para el sistema político saudita, pues entonces el rey Fahd publicó un decreto de ley denominado “El sistema de gobierno” por el cual se establecía un Majlis al Shura (Consejo consultivo) compuesto por 60 miembros elegidos por el mismo rey y cuya función era asesorar al monarca en diversos temas. Por ese mismo decreto, también se estableció la división del reino en 13 provincias administrativas.

En este contexto, en octubre de 1999 se registró una gran polémica por la invitación del rey Fahad a 20 mujeres para que asistieran a las sesiones del Majlis al Shura, lo que provocó el enojo de los sectores más conservadores del régimen. El 2001 quedó marcado en la historia del país no solo por los ataques de Al Qaeda a las bases militares británicas

4 No confundir con la Hermandad Musulmana, surgida en 1928 en Egipto.

5 Otros sectores sociales, como los trabajadores inmigrantes, los críticos y opositores políticos, también han sido objeto de opresión y discriminación por parte del régimen saudita.

y norteamericanas ubicadas en suelo saudita, en marzo de ese año, ni por los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono de septiembre, sino también por la decisión del rey -en diciembre- de aprobar la entrega de cédulas de identidad para mujeres, las cuales hasta ese momento eran registradas como parte de una familia patriarcal determinada.

En esta misma línea sobresale el que muchas mujeres participaran en septiembre de 2003 en las manifestaciones convocadas por académicos e intelectuales para exigir reformas políticas al gobierno. En la marcha convocada en Riad, se arrestaron a 270 manifestantes, incluidas decenas de mujeres.

La muerte del rey Fahd en agosto de 2005, seis meses después de la celebración de las primeras elecciones municipales en todo el país y en las cuales las mujeres no participaron, detuvo el proceso de reformas en asuntos de género, pero que recuperó el rey Abdullah en septiembre de 2011, cuando anunció que las mujeres obtendrían el derecho a votar y participar en elecciones municipales.

La autorización de septiembre de 2012 para que las mujeres participaran en los Juegos Olímpicos de Londres, proyectó internacionalmente al rey Abdullah como un reformador del sistema saudita, además de que en febrero de 2013 las mujeres obtuvieron una victoria espectacular cuando 30 de ellas accedieron al Majlis al Shura como ministras y ya no como meras espectadoras.

Con la muerte de Abdullah en enero de 2015, llegó al poder el rey Salman, quien continuó con las reformas en materia de género al permitir la participación de las mujeres en las elecciones municipales (20 de ellas fueron electas a cargos públicos).



De esta forma, la reciente decisión de permitir a las mujeres obtener una licencia de conducir, se enmarca dentro de esta serie de reformas legales que si bien no son suficientes para hablar de una igualdad de género, sí nos indican un proceso irreversible de reformas en esta cuestión.

Aún hay otras áreas en las cuales las mujeres sauditas enfocan sus esfuerzos para lograr la libertad, entre las cuales destacan: el sistema “wali” por el cual toda mujer debe tener un guardián oficial (suelen ser esposos, padres o hermanos) que, de manera extraoficial -pues no hay una ley escrita en este sentido- cuidan a la mujer y les extienden permisos para obtener un pasaporte, conseguir un trabajo, casarse o divorciarse⁶; los estrictos códigos de vestimenta que limitan la libertad de las mujeres de vestirse como sea su elección (la mayoría usan la abaya, una capa larga

6 En mayo de 2017 el rey Salman emitió un decreto por el cual autorizaba a las mujeres a conseguir trabajo, entrar a la universidad y practicarse una cirugía sin permiso de su “wali”.

negra y un velo que cubre la cabeza); y la interacción social con hombres con los cuales no tienen lazos familiares en lugares como escuelas, centros de trabajo, parques, museos etc.

Se suele hablar en los medios de comunicación y en ciertos sectores académicos de “los problemas de género en los países musulmanes”. Y aunque es innegable en que la gran mayoría de dichos países las mujeres aún tienen un largo camino por recorrer para lograr la igualdad absoluta ante la ley, resulta un error no ubicar la lucha de las mujeres en los contextos sociales, culturales y políticos específicos en los cuales se desenvuelven. Los retos en Arabia Saudita no son los mismos que aquellos que las mujeres turcas, iraníes, egipcias, palestinas o marroquíes -por mencionar solo algunos casos- enfrentan.

El caso de la mujer saudita y su lucha por la igualdad no inició ni terminará por su derecho a obtener una licencia de conducir, aunque esta victoria resulta trascendental de cara al futuro político y social del 43% de los habitantes de Arabia Saudita, un país que aún busca sobrevivir sin adaptar su sistema político ni cultural a los tiempos que corren y que permita a las millones de Manal al Sharif del reino vivir libres⁷.

7 Según datos poblacionales en el 2016 había 32,275,687 personas en Arabia Saudita, de las cuales el 56.6% eran hombres y el 43.3% mujeres. Del total de la población un 32% son inmigrantes.

Manuel Férrez G.
Profesor de Medio Oriente y Cáucaso Universidad Anáhuac Puebla, México.
Maestría en Integración Europea, Universidad Autónoma de Barcelona y
Maestría en Estudios Judaicos Universidad Hebreaica.
Especialidad en Medio Oriente y Ciencia Política, Galille Institute, Israel.
Licenciatura en Sociología, UNAM.

Ha compilado cinco libros especializados en Medio Oriente, siendo el más reciente “Un retrato de la Turquía contemporánea” (2017)

Mail: ferezmanuel@yahoo.com



Myanmar: la Nobel de la Paz y la persecución a los rohingya

La ex Birmania ha vuelto a los titulares producto de la represión estatal de esta minoría musulmana que hoy protagoniza una grave crisis humanitaria.

Eduardo Olivares C.



El periodista de Al Jazeera le pregunta a Aijja Begum, una niña de nueve años, sobre lo ocurrido en su pueblo en Myanmar. “Mientras estaba escondida tras un arbusto, vi cómo los militares dispararon a mis padres. Después le cortaron la garganta a mi papá y apuñalaron a mi mamá en el estómago”, relata ella, mientras al lado su hermana dos años mayor, Dilara, parece reflejar en su mirada perdida que el trauma aún está en

carne viva¹. Ambas están en Kutupalong, un campamento habilitado en Cox's Bazar, Bangladesh. Hasta allí, ellas y otros cientos de miles de refugiados de la etnia rohingya han escapado tras la represión estatal a esa minoría musulmana.

1 Khalid, Saif. “Rohingya children recall horror of losing parents”, Al Jazeera, 23 de septiembre de 2017. Ver en <http://aje.io/muc7b>.



El mismo día en que apareció el reportaje, la líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, dijo en un discurso televisado que sentía profundamente lo que estaba sucediendo en el estado de Rakhine, donde viven los rohingya. Era su primera intervención tras largas semanas de mutismo. Y aunque aseguró que su país estaba abierto al escrutinio internacional, no condenó la represión sobre esa etnia. Las organizaciones de derechos humanos quedaron en ascuas: Suu Kyi es una de las dirigentes políticas más emblemáticas de Asia, debido a su desgarradora lucha por la democracia, por la cual fue reconocida hace 26 años con el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se entiende su comportamiento?

De Birmania a Myanmar

Situado en el sudeste asiático, en la península indochina, Birmania se independizó del Imperio Británico tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Así surgió la Unión de Birmania, tironeada hasta 1962 por distintas facciones comunistas y nacionalistas.

A partir de 1962, el país estuvo gobernado por el dictador Ne Win, un militar que implantó el aislacionismo para avanzar a lo que denominó la “vía birmana” al socialismo. La economía declinó y el budismo se convirtió

en la religión oficial, lo que implicó una seria discriminación hacia grupos étnicos vinculados con el islam, el cristianismo y otras creencias.

En 1988, una cierta apertura política desembocó en una rebelión popular que fue duramente reprimida por las Fuerzas Armadas, tras lo cual se instauró una nueva etapa dictatorial a cargo de una junta militar.

Esa misma junta resolvió en 1989 el cambio de nombre del país, desde Unión de Birmania a Unión de Myanmar.

En forma sorpresiva, el régimen permitió elecciones en 1990. Para su mala fortuna, fueron ganadas por el movimiento liderado por Aung San Suu Kyi, hija de Aung San (1915-1947), considerado el gran precursor de la independencia birmana y “padre de la patria”.

Aung San Suu Kyi, que había retornado a su país en 1988, se vistió de líder popular y organizó el partido Liga Nacional para la Democracia (LND). Y apenas los militares supieron que habían perdido las elecciones, anularon sus resultados. Entonces, la activista inició una poderosa protesta, avalada en gran medida por la veneración

popular a su padre. Ante ello, las autoridades la condenaron a una prisión domiciliaria que duraría dos décadas.

La Nobel encerrada

Durante su encierro, Sung Kyi jugó el papel de tracción democrática que siempre resulta tan difícil de implementarse en las zonas del sudeste asiático. Esta mujer birmana se convirtió en la cabeza de una rebelión pacífica que buscaba el retorno de las elecciones en un país pobre y dividido. Esa determinación pro democrática fue conocida en todo el mundo.

En 1991 fue galardonada con el Premio Nobel de Paz, motivado por su lucha por la paz en un país gobernado por un círculo militar que violaba los derechos humanos de sus habitantes.

La junta se debilitó en el siglo XXI y, finalmente, en medio de una presión internacional creciente, convocó a elecciones parciales en 2012 y la LND obtuvo una mayoría clara. Pero había varias trampas en ese camino. Los militares habían redactado una Constitución que en la práctica les reservaba varios poderes de veto y evitaba que Suu Kyi fuese la Jefa de Estado oficial, pese a lo dictado por las urnas.

Para evitar otro nuevo retroceso, Suu Kyi aceptó esta transición: ella lideraría de facto el país con el cargo de Consejera de Estado, a cambio de mantener el poder relativo de los militares en las decisiones más importantes.

Los rohingya

Se calcula que hay casi un millón de rohingya en Myanmar. Viven principalmente en la costa norte y en su mayoría son musulmanes. Desde la creación de Birmania han sido históricamente ignorados. De partida, no están reconocidos legalmente como uno de los 135 grupos étnicos del país. Nadie los representa en el Parlamento y tienen restricciones para educarse,

casarse, trabajar y practicar sus creencias. Tampoco se les otorga ciudadanía, lo que los convierte en apátridas y por lo tanto no pueden votar. Y si quieren salir del país, deben obtener permisos especiales, pero como no cuentan con papeles, toda su vida se torna un cruel proceso kafkiano.

La persecución contra esta minoría es notoria y antigua. Oleadas destructivas previas han provocado migraciones masivas, de modo tal que hay casi tantos rohingya en Myanmar como en países próximos como Bangladesh, India y Malasia.

Los mayores enemigos de esta etnia son los nacionalistas budistas. Sí, los mismos budistas que solemos identificar con la paz y la reflexión ascética. Han sido monjes budistas quienes han incitado y hasta participado en la quema de aldeas y asesinatos de minorías musulmanas, a quienes culpan de atentar contra los pilares de la nación birmana. A tanto llega el poder de estos grupos radicales que incluso Aung San Suu Kyi debió retirar a todos los candidatos musulmanes que tuvo en su lista parlamentaria para aumentar sus opciones de victoria.

En 2016, el denominado Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA) atacó unos puestos policiales en rechazo a la represión contra ellos, tras lo cual vino la represalia del aparato estatal contra civiles de esa etnia. En agosto de 2017, el ARSA realizó otro ataque en que murieron 13 policías; la respuesta militar, a partir del 25 de ese mes contra los civiles rohingya fue desproporcionada y desde entonces ha generado una enorme condena mundial.

La atroz incertidumbre

En el glosario de las organizaciones internacionales, "limpieza étnica" es el término referido a las acciones de desplazamiento contra un grupo particular en función de sus creencias, raza o ideología. La política represiva de Myanmar contra los



rohingya está documentada: violaciones a mujeres, infanticidios, ejecuciones sumarias, destrucción de aldeas y cosechas.

Desde fines de agosto, más de 500.000 rohingya han abandonado sus hogares hacia el vecino Bangladesh, país que carece de los medios para absorber esa cantidad de refugiados y que se suman a los 200.000 que habían llegado un año antes.

El dolor de la atrocidad contra esas minorías se agrava, además, cuando quien dirige Myanmar es una emblemática activista por los derechos humanos. Hay grupos que han pedido retirarle el Nobel de la Paz a Suu Kyi y hasta el propio comité noruego del Nobel, tan reacio a comentar sobre sus galardonados, ha declarado que en sus estatutos la revocación del premio no existe. Puede que esas críticas no sean justas, porque el verdadero poder en Myanmar lo mantienen los militares, de modo que las facultades de Suu Kyi son limitadas.

Por ahora, Suu Kyi se mueve por la delgada línea que le permite prometer medidas en ayuda a las comunidades rohingya, sin desautorizar a las Fuerzas Armadas. Si ella condenara abiertamente a sus Fuerzas Armadas, es posible que no solo sea depuesta, sino que la situación en el estado de Rakhine empeore incluso más.

Eduardo Olivares Concha.
Periodista. Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Estudios Internacionales y del Pacífico. Universidad de California, San Diego.
Doctor en Ciencia Política. Universidad de Mánchester.
Profesor de Historia Contemporánea de Occidente en la
Escuela de Periodismo de la Universidad Finis Terrae.
Ha trabajado en el Diario Financiero, La Tercera y El Mercurio.
eolivaresc@uft.edu



Nikki Haley: la poderosa embajadora de EE.UU. en la ONU

Hija de inmigrantes, fogueada en el Tea Party y con la experiencia de haber sido la primera gobernadora de Carolina del Sur, Haley es una estrella ascendente del Partido Republicano.

Alberto Rojas M.



“Si Corea del Norte prosigue con su temerario comportamiento, y los Estados Unidos se ven en la necesidad de defenderse a sí mismo o a sus aliados, Corea del Norte será destruido. Todos los sabemos y no lo deseamos”.

El pasado 17 de septiembre, estas palabras no dejaron de sorprender al periodista de CNN que realizaba la entrevista y

causaron inmediata preocupación en el contexto internacional. Después de todo, no se toma a la ligera la idea de exterminar a 25 millones de personas.

La responsable de esta afirmación fue Nikki Haley, la actual embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, y una de las figuras clave del gobierno de Donald Trump. De hecho, 24 horas después, el



mandatario estadounidense usó casi las mismas palabras que ella en su esperado discurso ante la Asamblea General.

Haley llegó a la ONU en enero de este año y desde entonces no le ha costado trabajo hacerse notar. Basta recordar que una de sus primeras declaraciones apuntó a dejar en claro la fuerza de EE.UU., el apoyo a sus aliados y que estos cumplieran con lo que Washington esperaba de ellos.

“Para aquellos que no nos apoyen, vamos a anotar nombres. Y nos aseguraremos de responder a eso adecuadamente”, afirmó Haley, quien desde entonces se ha caracterizado por su férreo apoyo a Israel, sus duras críticas a los gobiernos de Venezuela y Siria, y su incansable esfuerzo por aumentar la presión sobre el régimen norcoreano.

A partir de lo que ella ha demostrado durante estos meses en la ONU, no son pocos los que consideran que su trayectoria política va en ascenso y que, tal vez —más temprano que tarde— tenga que hacer las maletas y cambiar Nueva York por Washington.

De India a EE.UU.

Con apenas 45 años de edad, Haley ha recorrido un camino lleno de desafíos, tanto en lo profesional como lo personal. Y que comenzó con su nacimiento, el 20 de enero de 1972, en el corazón de una familia de inmigrantes sij provenientes del estado de Punjab, India. Pero no como Nikki (que en punjabi significa “pequeña”), sino con el nombre de Nimrata Randhawa.

Su padre, Ajit Singh Randhawa, era profesor en la Universidad de Agricultura de Punjab, y su madre, Raj Kaur Randhawa, era una abogada titulada de la Universidad de Delhi. Y cuando él obtuvo un puesto en la Universidad de Columbia Británica, la familia se trasladó a Canadá. Posteriormente, en 1969, luego que su padre obtuviera su PhD, todos se mudaron a Carolina del Sur, en EE.UU.

En 1976, su madre abrió una tienda de ropa y a partir de los 12 años, Haley comenzó a hacerse cargo de la contabilidad del negocio. Un camino muy similar al que había hecho, décadas antes, otra destacada mujer en el ámbito político: Margaret Thatcher.

En 1989, Haley se graduó de la escuela secundaria Orangeburg y años más tarde se tituló en Contabilidad de la Universidad Clemson. Y en poco tiempo, llegó a convertir el negocio de ropa de su madre en una empresa de millones de dólares.

El cambio de nombre llegó, finalmente, cuando conoció a quien se convertiría en su esposo, Michael Haley, un veterano de la guerra de Afganistán que además la persuadió de dejar de ser sij y adoptar el protestantismo.

En 2004, Haley decidió ingresar al mundo de la política estadounidense al alero del Partido Republicano, logrando en poco tiempo convertirse en una de las figuras de su ala ultraconservadora: el Tea Party (creado en 2010).

Entre 2005 y 2011 integró la Cámara de Representantes de Carolina del Sur, lo que le permitió hacerse conocida y ganar la experiencia para intentar el reto de levantar su candidatura a la gobernación de ese estado.

El sueño se convirtió en realidad cuando en las elecciones de noviembre de 2010, Haley obtuvo el 51,4% de los votos, lo

que la transformó en la primera mujer y la primera hija de inmigrantes en ocupar ese cargo.

Haley plasmó gran parte de esas vivencias en su autobiografía *Can't Is Not an Option* (2012), lo que la volvió aún más visible para la ciudadanía.

Carrera meteórica

Durante su primer período como gobernadora de Carolina del Sur, ella fue una abierta defensora de que la bandera de los Estados Confederados —que en el siglo XIX defendieron la esclavitud y llevaron al país a la Guerra Civil— permaneciera en los principales lugares públicos de Carolina del Sur. Sin embargo, después de que el joven blanco Dylann Roof atacara en 2015 una iglesia en Charleston y asesinara a nueve feligreses afroamericanos, ella encabezó la iniciativa destinada a retirar todas las banderas confederadas del estado.

En noviembre de 2014, Haley obtuvo la reelección con un 55,9% de los votos, lo que le garantizó un segundo periodo hasta enero de 2019. Sin embargo, tuvo que renunciar a comienzos de este año, luego que aceptara la propuesta de



Donald Trump de convertirse en la nueva embajadora de EE.UU. en Naciones Unidas. Un cargo en el que fue ratificada por el Senado por 96 votos contra 4.

De acuerdo a una versión publicada por el prestigioso portal Politico.com, Trump originalmente le había ofrecido el puesto de secretaria de Estado. Pero ella habría declinado, argumentando su falta de experiencia en el ámbito de la política internacional.

Este episodio llama la atención no solo porque ella hubiese rechazado el cargo más importante de la diplomacia estadounidense, sino porque durante la campaña presidencial de 2016, Nikki Haley respaldó primero a Marco Rubio y luego a Ted Cruz, distanciándose permanentemente de Trump.

Al margen de eso, a lo largo de estos meses se ha visto que el mandatario la escucha y respeta, aunque entre ambos haya claras diferencias; por ejemplo, él la considera débil al momento de manejar temas vinculados a la migración, al tiempo que ella desconfía abiertamente de Rusia y considera —a diferencia de Trump— que sí hay pruebas claras de la intervención de Moscú en la elección presidencial del año pasado.

¿Hacia dónde apunta su carrera? Varios analistas sostienen que más temprano que tarde ella acabará reemplazando a Rex Tillerson, considerando el opaco desempeño que él ha tenido como secretario de Estado. Y no son pocos los que ya la consideran una futura carta para el cargo de vicepresidente. O incluso, una posible candidata presidencial por el Partido Republicano.

**EL MUNDO ESTÁ MÁS CERCA A TRAVÉS DEL OBSERVATORIO
DE ASUNTOS INTERNACIONALES. SÍGUENOS EN REDES
SOCIALES Y ESCRÍBENOS A NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO.**



Observatorio de Asuntos Internacionales Universidad Finis Terrae



@ObsInterUFT



Observatorio Internacional - U. Finis Terrae



observatoriointer@uft.cl



<http://comunicacionesyhumanidades.uft.cl/observatorio-de-asuntos-internacionales>